

interferencias de leyes imperiales de derecho eclesiástico. A propósito de éstas, hay que tener en cuenta cómo, a veces, los cánones vinieron a dar a los emperadores algunas facultades sobre las iglesias que les negaba la misma legislación imperial.

Esta conexión con el derecho secular es, en Oriente, mucho más fuerte y compleja que la que podrá darse en Occidente con el estudio de *utrumque ius*, pues la presencia aquí del *Corpus Iuris Civilis* hizo posible que los juristas de la Recepción europea contaran siempre con una base más firme y una noción más clara para distinguir entre el derecho secular y los sagrados cánones. Con todo, no deja de haber cierta analogía entre la labor de los escoliastas bizantinos y de sus obras de recopilación y comentario, por un lado, y, por otro, la de los Glosadores y Comentaristas europeos, que suceden temporalmente a los bizantinos, y, en parte, les son contemporáneos. Pero se trata de una analogía «real», en razón de la materia hermenéutica, más que de influencias y derivación personal. No debe olvidarse la tajante separación cultural entre un Oriente, que llegó a olvidar el latín, donde los Basílicos llegaron a suplantarse la obra de Justiniano, y un Occidente, en el que se ignoraba el griego, pero aquella obra del gran emperador bizantino se constituyó en fundamento de toda la futura cultura jurídica. Esta diferencia lingüística explica también la incomunicación entre la Primera y la Segunda Roma, y, en definitiva, el grave Cisma que afligió a la Cristiandad desde la Edad Media a nuestros días, agravado por la superveniencia de la Tercera Roma, Moscovia. Pero toda esta historia de la Cristiandad oriental tiene hoy una renovada importancia, también en relación con la reciente promulgación del Código canónico oriental (AAS. 1990, núm. 11).

ALVARO D'ORS

## COMENTARIOS AL CODIGO

J.-Cl. PÉRISSET, *La paroisse*, Paris, Tardy, 1989, 270 págs.

El autor es conocido por su estudio sobre los párrocos, en especial por su libro *Curé et presbytérium paroissial*, que lleva como subtítulo *Analyse de Vatican II pour une adaptation des normes canoniques des prêtres en paroisse*, publicado en Roma en 1982 (cfr. nuestra recensión en «Ius Canonicum» XXVI [1986], pp. 449-453). Ahora, cuando ya se ha realizado esa adaptación con la promulgación del *Codex* de 1983, nos ofrece un análisis riguroso de las normas codiciales. Y lo hace con sentido crítico, con la visión de aquél que tiene un buen conocimiento de la situación anterior, de las propuestas conciliares y de las esperanzas propiciadas por los textos del Vaticano II. Por todos estos títulos, Mons. Périsset es uno de los canonistas mejor preparados para tratar de la parroquia en el nuevo Código.

Subraya cómo la normativa del Código de 1983 ha sabido traducir en forma jurídica las principales aportaciones del Concilio Vaticano II y la evolución pastoral posterior al Código piobenedictino relativas a la parroquia y al ministerio pastoral parroquial. Recordando los principios mencionados por Juan Pablo II en la *Sacrae disciplinae leges*, los principios orientadores dados por Pablo VI para la revisión del anterior derecho -el principio de subsidiariedad y la llamada a que el ejercicio de la potestad aparezca más claramente como un servicio-, el Autor llega a la conclusión de que tales principios han sido felizmente aplicados en las normas relativas a la parroquia y al ministerio parroquial, aunque echa de menos que no se haya explicitado la participación activa de los laicos en la misión de la Iglesia y sus derechos propios al nivel parroquial.

La materia se presenta dividida en diez capítulos que siguen, por regla general, el orden de los cánones del Código e incluso de los párrafos mismos. El primero de estos capítulos está dedicado a «la comunidad parroquial» (pp. 25-47): la parroquia aparece como una comunidad de fieles, necesaria -aunque no pertenezca a la estructura esencial de la Iglesia-, confiada a un fiel que es necesariamente sacerdote. Esta comunidad adquiere personalidad jurídica, realidad que no mencionaba el Código de 1917. Tiene una relación determinada con la diócesis, con semejanzas y diferencias que están evidenciadas bajo forma de cuadro. Si no se puede hablar de porción del Pueblo de Dios, la expresión «comunidad de fieles» no se refiere a la sola parroquia. La encontramos también en el can. 381 § 2 para designar a las Iglesias particulares que no son diócesis. Esto pone de relieve hasta qué punto da una conexión estrecha entre parroquia e Iglesias particulares en cuanto al principio comunitario.

«El párroco, pastor propio de la parroquia» (pp. 49-63) es una nueva definición del párroco (cán. 519) que se inscribe en la sistemática de esta parte del Código, que presenta la parroquia inmediatamente antes de dar las normas relativas al párroco, mientras el Código de 1917 las situaba entre las normas sobre las divisiones territoriales dentro de la Iglesia. La condición de párroco como pastor propio es evidenciada de modo particular por las normas del can. 107 relativas al domicilio, ya que, mediante el domicilio, el fiel adquiere su párroco propio. Existen en la Iglesia particular otras comunidades estables de fieles que no son parroquias (es el caso del seminario, de las casas religiosas, de los institutos de enseñanza, de los cabildos catedralicios). Se trata de comunidades que tienen un principio específico de unidad: formación, apostolado, oración. En cuanto a la comunidad parroquial, territorial o personal, es el resultado de dos principios generales: por una parte la población que reside en un territorio, acaso caracterizada -para las parroquias personales- por su origen, idioma, ocupación principal; por otro lado, el oficio de párroco encargado de dicha comunidad. Se constituye de esta forma lo que se puede llamar el *principio parroquial*, conjunción del principio comunitario (comunidad determinada de fieles) y del principio jerárquico (oficio de párroco, que desempeña su misión pastoral bajo la autoridad del obispo).

Nos limitamos a unas pinceladas, para hacer resaltar tal o cual aspecto del cuadro que el autor esboza. «La provisión del oficio de párroco» (pp. 65-91) presenta seguidamente las condiciones fundamentales que debe reunir el párroco; la estabilidad en

el oficio -estudiada en base a las redacciones conciliares, al motu proprio *Ecclesiae Sanctae* y a los trabajos de la Comisión codificadora-; el nombramiento del párroco; el principio de la unidad del cargo pastoral parroquial, al que no se opone el hecho de que se nombre un párroco para varias parroquias, en cuyo caso el oficio es único (en contra de la opinión de H. Paarhammer, que el autor critica repetidas veces); la toma de posesión de la parroquia.

El capítulo siguiente contempla dos puntos: «el caso del párroco en su oficio y la vacante de la parroquia» (pp. 93-117). El autor se detiene a estudiar los trabajos conciliares sobre la renuncia al oficio por razón de edad. Y lo hace por ser una cuestión de sumo interés para los párrocos y para las comunidades a ellos encomendadas. Su jubilación *ex officio* en algunos casos -siendo las normas del Código más humanas que anteriormente- es a menudo considerada como una injusticia. Señala el autor que la vacancia del oficio crea una situación provisional que no genera un oficio propiamente dicho de administrador parroquial. El obispo diocesano puede designar este último con antelación, siguiendo la fórmula *nunc pro tunc*, que el autor presenta con algún detalle, ya que puede dar la impresión de oponerse a la norma del can. 153 § 1 que prohíbe la provisión de un oficio que no se encuentra vacante.

Desplazados, con respecto al orden de los cánones, aparecen en el capítulo V «los derechos y los deberes del párroco como pastor propio» (pp. 119-168); es con mucho el capítulo más amplio, y se subdivide en trece apartados. Los tres primeros dedicados a la función de enseñar a la comunidad parroquial (can. 528 § 1), la función de santificar (can. 528 § 2) y la función de regir dicha comunidad (can. 529 § 1), función que incluye la obligación personal del párroco y su responsabilidad de fomentar la comunión eclesial. Subraya el autor que las *Fuentes* omiten el decreto *Apostolicam actuositatem* nº 10, que partiendo de la misión de los laicos pone de relieve el lugar de la parroquia en la diócesis y en la Iglesia. Ese nº 10 califica a la parroquia como «célula de la diócesis» y expone los imperativos de la pastoral de conjunto en todos sus niveles. De hecho, la mayoría de las obligaciones y derechos de los fieles y de los laicos encuentran su aplicación primera, aunque no exclusiva, en la parroquia, con relación al ejercicio de la función de párroco.

Un breve capítulo presenta «los consejos en la comunidad parroquial» (pp. 169-177): consejo pastoral y de asuntos económicos. A continuación, Mons. Périsset se adentra en una cuestión delicada: «las fórmulas excepcionales del cargo pastoral parroquial» (pp. 179-207), cuestión que ha tratado ampliamente en otros trabajos y sobre la que formula una serie de críticas.

Tras un capítulo dedicado al «vicario parroquial» (pp. 209-225), pasa a «los vicarios foráneos» (pp. 227-246).

Finalmente, el capítulo décimo y último trata de «los rectores de iglesias y los capellanes» (pp. 247-258). Con respecto a los rectores, el autor nota que los cánones correspondientes estarían mejor situados después de los dedicados a los capellanes, dado que éstos últimos tienen encomendada una comunidad de personas, mientras a los rectores se les confía ante todo un edificio material a través del cual construyen el edificio espiritual.

Un libro muy completo y tanto más útil cuanto no se limita a exponer las normas vigentes, sino que -como apuntábamos al inicio del comentario- subraya sus logros sin ocultar sus deficiencias. Supone, por lo tanto, una aportación valiosa tanto para el canonista como para el amplio público de lengua francesa al que va dirigido.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

B. DUFOUR, *La pénitence et l'onction des malades*, Paris, Tardy, 1989, 183 págs.

Con seriedad profesional y científica, l'abbé Dufour hace un estudio sistemático de la normativa vigente acerca de los sacramentos de la reconciliación y de la unción de enfermos. La lleva a cabo sin limitarse a un comentario que podríamos calificar de «frío». Acude a las fuentes (sin disponer todavía de la edición de la Polyglota Vaticana), principalmente al magisterio conciliar y de los últimos Papas y a los documentos de aplicación, en especial de la Congregación para el Culto divino. Cuida sin embargo de ceñirse al ámbito propiamente jurídico. Decisión que se justifica plenamente; aunque, a nuestro parecer, no hubieran sobrado algunas consideraciones teológicas y pastorales en los puntos de mayor desconcierto entre los fieles hoy en día. ¿Acaso el mismo Código no nos ofrece para cada sacramento un canon introductorio de índole jurídico-teológica?

Destinada a un público amplio, la presente obra quiere vulgarizar el derecho canónico de los sacramentos. No es concebida como un tratado. De ahí que realice un estudio lineal de los cánones siguiendo el orden del Código.

Abundan las páginas esclarecedoras de determinados puntos, empezando ya por el primero de los cánones, el can. 959 sobre la penitencia como sacramento. El autor establece la relación del sacramento de penitencia con los demás actos de culto divino, en especial la Eucaristía y el matrimonio, define lo que se entiende por «buenas disposiciones» y subraya los efectos de una situación de permanencia en estado de pecado grave y manifiesto.

Del mismo modo, a propósito del penitente, hace un desarrollo sobre la confesión de los fieles: clérigos; miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica; y fieles laicos, aunque a estos últimos el Código no los menciona indistintamente, sin embargo, la práctica del sacramento de penitencia es una consecuencia de la necesidad de estar en gracia para que la misión de los laicos sea verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo.

También a propósito del sacramento de la unción de enfermos, el autor se detiene a exponer el origen conciliar del can. 998, el programa conciliar de reforma y la reforma de la disciplina operada por Pablo VI.

En dos ocasiones -si no nos equivocamos- incluye la legislación particular de la conferencia episcopal francesa: en materia de absoluciones colectivas y respecto a la sede para la confesión.